



EDITORIAL CDHNU a entrenar a asesinos filipinos?

Realmente parece así. Porque, a pesar de la abrumadora evidencia de violaciones sistemáticas y desenfrenadas de los derechos humanos en Filipinas, y en medio de los llamamientos mundiales para investigar estas violaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución sobre “cooperación técnica y desarrollo de capacidades para la promoción y protección de los derechos humanos En Filipinas”.

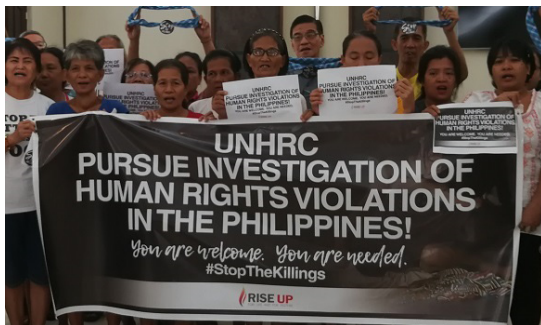
El propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya verificó en su informe de junio de 2020 lo que las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han estado diciendo todo el tiempo: Estimulados por los discursos de odio y glorificación de homicidio del presidente Rodrigo Duterte, los agentes de seguridad del estado y sus secuaces armados han estado realizando una monstruosa campaña de persecución y muerte sobre el pueblo filipino.

¡Y aquellos que hacen campaña activamente contra estas monstruosidades - defensores de los derechos humanos, activistas de la oposición, abogados y periodistas - están siendo objeto de acoso, difamación y asesinato por parte de estos mismos agentes gubernamentales!

El CDHNU ha hecho un flaco favor a los miles de víctimas, sus familias y colegas que piden apoyo y justicia. No esperan que esta «cooperación y desarrollo de capacidades» permanezca en manos de los asesinos. De hecho, altos funcionarios del gobierno de Duterte han acogido con satisfacción la resolución. ¡Una reivindicación, dijeron, de los esfuerzos nacionales para defender los derechos humanos! ¡Los oficiales de policía y militares pronto se autoproclamarán protectores de derechos humanos capacitados por la ONU!

Sin embargo, no se equivoque: la resolución del CDHNU sigue siendo un reconocimiento de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Filipinas. El régimen de Duterte ha sucumbido a la presión nacional e internacional y aceptará la entrada de los mecanismos de la ONU para la “cooperación y desarrollo de capacidades”. Y los estados miembros del CDH, especialmente aquellos que copatrocinaron la resolución, han puesto en juego su credibilidad de que su resolución de hecho resultará en la protección de los derechos humanos en Filipinas.

También es un mensaje claro que recae sobre el propio pueblo filipino seguir defendiendo decididamente sus intereses, libertades y derechos colectivos. Que, con o sin el apoyo de las agencias de la ONU, la lucha contra la injusticia y la tiranía la librará y ganará el propio pueblo filipino. **UP**



Las familias de las víctimas exigen una investigación imparcial de las ejecuciones extrajudiciales. Foto: bulatlat.com

Grupos de derechos humanos critican la ‘débil’ resolución del CDHNU

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitida el 7 de octubre de 2020, relativa a la cooperación técnica y la creación de capacidad para la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas ha sido criticada severamente por grupos de derechos humanos filipinos e internacionales por ser “totalmente inadecuada” y “débil”. Diferentes grupos afirman que no satisface las múltiples y generalizadas demandas de una investigación independiente sobre los muchos miles de

violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno del Presidente Rodrigo Duterte.

El informe de junio de 2020 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, resolvió llevar a cabo una investigación independiente sobre violaciones a los derechos humanos y ha sido posteriormente derrotado por una solución de compromiso presentada por los gobiernos de Filipinas, Hungría, Islandia, India, Nepal, Noruega, Tailandia y Turquía.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

El Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF), como representante de los pueblos revolucionarios de Filipinas, escribió a 46 Estados Miembros del CDH pidiendo, en nombre del pueblo filipino, un voto decisivo por el SÍ a la resolución del CDH. Varios cientos de organizaciones apoyaron el poderoso llamamiento.

Las organizaciones que luchan por los derechos humanos en Filipinas, entre ellas la Alianza por los Derechos Humanos de Karapatán, la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (National Union of People's Lawyers), la Voz Ecuménica por los Derechos Humanos y la Paz (EcuVoice) y el grupo de apoyo a los presos políticos Kapatid, han expresado su gran decepción por la resolución del CDH. Han declarado que lucharán por todos los medios para asegurar que se haga justicia a los muchos miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos que existen bajo el régimen de Duterte.

Al expresar su apoyo a los defensores de los derechos humanos en Filipinas, el Director de Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, Peter Prove, afirmó: “Los activistas de la sociedad civil que se manifiestan contra el régimen de Duterte son tildados de terroristas y comunistas. Se enfrentan al acoso, las amenazas y, en algunos casos, a la muerte y al asesinato”.

Prove afirmó también: “Los pueblos indígenas han sido particularmente atacados, e incluso las iglesias no se han salvado”. El Consejo Mundial de Iglesias ha manifestado su apoyo al Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, pues este último es uno de los que han sido “marcados en rojo” y sometidos a tal acoso. **UP**



Parlamentum Europaeum

El Parlamento Europeo pide una investigación internacional sobre los abusos de derechos en Filipinas

El Parlamento Europeo, el 17 de septiembre, “condenó enérgicamente” las graves, y a gran escala, violaciones de derechos humanos que se están perpetrando bajo la

administración del Presidente Rodrigo Duterte y pidió a los Estados miembros de la UE que apoyen la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para una “investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Filipinas desde 2016”.

La resolución del Parlamento Europeo fue adoptada por 626 votos a favor, 7 en contra y 52 abstenciones. En ella se expresaba “la más honda preocupación por el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos durante el mandato del Presidente Duterte” y se condenaban enérgicamente “las miles de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la llamada guerra contra las drogas”.

Se pidió al gobierno de Duterte que pusiera fin a las matanzas y que disolviera los grupos paramilitares privados y estatales. Dijo que la Corte Penal Internacional debía “continuar su investigación sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en el contexto de los asesinatos de la ‘guerra contra las drogas’” y exigió al gobierno de Duterte que “cooperara plenamente” con los procedimientos de la Corte Penal Internacional.

También pidió a la Comisión de la UE que “iniciara inmediatamente el procedimiento” para retirar las preferencias del SGP+ a Filipinas “en ausencia de una mejora sustancial” de la situación de los derechos humanos en el país. El plan SGP+ establece nulos aranceles a las exportaciones de Filipinas a Europa.

Los funcionarios y aliados políticos del gobierno de Duterte rechazaron la resolución y amenazaron con tomar medidas contra los miembros del Parlamento Europeo. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el Secretario de Asuntos Exteriores Teodoro Locsin Jr. criticó, en nombre de los partidarios políticos de Duterte, al Parlamento Europeo por abordar “cuestiones sin sentido” como el cierre del gigante mediático ABS-CBN que, según dijo, “han descendido al nivel de la estupidez”.

En entrevistas con los medios de comunicación, el portavoz de Duterte, Harry Roque, dijo que la resolución de Europa se basaba en una “desinformación” alimentada por el Partido Comunista de Filipinas y el Presidente Fundador del CPP, José María Sison, que reside en los Países Bajos como refugiado político.

“Es el colmo de la paranoia de este régimen afirmar que el CPP influyó en los miembros del Parlamento Europeo”, dijo Marco Valbuena, Jefe de Información del CPP. “Lo que ya es obvio”, dijo, “es que Rodrigo Duterte es un tirano asesino y vengativo, que intenta destruir a su propio pueblo para fomentar sus ambiciones fascistas”.

Valbuena acogió con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo. Dijo que la resolución “confirma lo aislado que está el régimen de Duterte, no sólo del pueblo filipino, sino también de la comunidad internacional”.

Dijo: “Al igual que Marcos antes de su derrocamiento, Duterte se ha convertido en un paria internacional”.



La congresista de Pensilvania Susan Ellis Wild. Foto: wikipedia

Un proyecto de ley de EE.UU. propone reducir la ayuda militar a Filipinas por violaciones sistemáticas de derechos

El 23 de septiembre de 2020, los miembros del Congreso de los Estados Unidos presentaron la Ley de Derechos Humanos de Filipinas (PHRA), un proyecto de ley en el que se pide al Gobierno de Estados Unidos que “suspenda la asistencia de seguridad a Filipinas hasta que cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad filipinas y las fuerzas estatales responsables rindan cuentas”.

Al hablar sobre el proyecto de ley, la congresista de Pensilvania Susan Ellis Wild, del Partido Demócrata, dijo: “El brutal régimen de Rodrigo Duterte está utilizando el pretexto de la llamada Ley Antiterrorista para intensificar los ataques dirigidos a los organizadores laborales, los trabajadores y los opositores políticos”. Esta ley permite que los sospechosos sean detenidos por la policía o el ejército sin cargos por un período de hasta 24 días y puestos bajo vigilancia por un tiempo de hasta 90 días”.

El representante Wild dijo: “Dejemos claro que los Estados Unidos no participarán en la represión. Apoyemos al pueblo de Filipinas”.

También apoyan el proyecto de ley 19 representantes del Partido Demócrata. Entre ellos están los representantes Jim Costa, Zoe Lofgren, Debra Haaland, Jan Schakowsky, Ro Khanna, Jim McGovern, Bobby Rush, Hank Johnson, Andy Levin, Barbara Lee, Eleanor Holm Norton, Jaimie Raskin, Alan Lowerthal, Ilhan Omar, Mark Pocan, Pramila Jayapal, Jimmy Gómez, Alexandra Ocasio-Cortez y Danny Davis.

El proyecto de ley fue acogido con satisfacción por muchas organizaciones, entre ellas la alianza de derechos humanos Karapatan. Cristina Palabay, Secretaria General de Karapatan, dijo que Filipinas es el mayor receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Entre 2016 y 2019, esta ayuda ascendió a un total de 554 millones de dólares. De esta cantidad, 267 millones de dólares se destinaron a bombas, armas de fuego, balas y otros materiales de guerra.

La Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor federación de sindicatos de los EE.UU., se unió al creciente llamamiento para recortar la ayuda militar de los EE.UU. al gobierno del Presidente Rodrigo Duterte. Emitió una resolución apoyando el proyecto de ley propuesto.

Decía: “En los cuatro años transcurridos desde la elección de Rodrigo Duterte como presidente de Filipinas, nos ha preocupado cada vez la más creciente represión de los activistas laborales, de derechos humanos, medioambientales y políticos en Filipinas... Al menos 48 líderes y activistas laborales han sido asesinados. “Mientras tanto, Estados Unidos siguen proporcionando dólares de los contribuyentes a las fuerzas militares y policiales de Filipinas que participan activamente en estas violaciones de los derechos humanos”.

Anteriormente, el 16 de julio de 2020, el representante estadounidense Jan Schakowsky y otros 49 miembros del Congreso de los Estados Unidos pidieron al gobierno de Duterte que anulara la Ley Antiterrorista. En una carta entregada al Embajador de Filipinas en los Estados Unidos, José Manuel Romualdez, los legisladores plantearon los casos documentados de violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que se han producido en los cuatro años de la administración Duterte.

“Con un largo historial de utilización de las leyes sobre drogas y de la ley marcial en algunas partes del país para atacar a activistas inocentes que no hicieron otra cosa que hablar en contra de las políticas del gobierno, es evidente que no nos queda otra opción que considerar esto como el último y más atroz esfuerzo por silenciar a quienes luchan por los derechos humanos básicos y fundamentales en Filipinas”, dijeron. **UP**



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org